

Venezuela y la reconstrucción del Estado

Antonio De La Cruz

Director Ejecutivo

23/Jun/2026

La transición comienza cuando las instituciones vuelven a importar.

Durante años, Venezuela fue interpretada como una novela. Los personajes cambiaban, los nombres se sucedían, los discursos se multiplicaban, pero el argumento permanecía intacto. Todo parecía reducirse a una pregunta: ¿quién gobernará el país cuando termine el ciclo chavista?

La pregunta era comprensible. También era equivocada.

Las sociedades suelen enamorarse de los individuos cuando en realidad dependen de las instituciones. Buscan salvadores cuando lo que necesitan son reglas. Confían en héroes cuando lo que garantiza la libertad es la existencia de límites al poder.

Por eso el hecho más importante que está ocurriendo hoy en Venezuela no es la aparición de un nuevo liderazgo ni la desaparición de uno antiguo. Es algo menos espectacular y mucho más trascendente: el debate ha comenzado a desplazarse desde los nombres propios hacia la arquitectura institucional del país.

La reciente reunión entre Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez ha sido interpretada de múltiples maneras. Algunos han querido verla como una sustitución de liderazgos. Otros, como una derrota política de María Corina Machado. No faltan quienes la consideran una negociación convencional entre adversarios.

Sin embargo, ninguna de esas interpretaciones parece capturar lo esencial.

Lo verdaderamente relevante es que la conversación ya no gira alrededor de ministerios, cuotas de poder o repartos burocráticos. Los asuntos colocados sobre la mesa son otros: la composición del Consejo Nacional Electoral, la independencia del sistema judicial, las garantías para los derechos políticos, la libertad de expresión y las condiciones para futuras elecciones.

En otras palabras, no se está discutiendo quién ocupará la silla presidencial. Se está discutiendo cómo evitar que alguien vuelva a convertirlo en una propiedad personal.

Esa diferencia cambia todo.

Las democracias no se construyen el día de las elecciones. Se construyen mucho antes. Nacen cuando existen árbitros confiables, tribunales independientes, prensa libre y mecanismos capaces de garantizar que quien pierde acepte el resultado y quien gana no abuse de la victoria.

Venezuela pasó más de un cuarto de siglo destruyendo precisamente esos mecanismos.

El deterioro fue gradual. Primero se debilitó la autonomía institucional. Luego se subordinó la justicia al poder político. Más tarde se convirtió la competencia electoral en un procedimiento administrado desde el Estado. Finalmente, la diferencia entre gobierno e instituciones desapareció por completo.

El resultado fue un país donde las reglas dejaron de proteger a los ciudadanos y comenzaron a proteger a quienes controlaban el poder.

Reconstruir ese edificio tomará tiempo. Mucho más tiempo del que desean quienes esperan una transformación inmediata. Pero la historia ofrece pocas alternativas. Las transiciones duraderas nacen de instituciones fuertes. Las transiciones apresuradas suelen producir nuevas frustraciones.

Existe además otro elemento imposible de ignorar. Venezuela ya no es únicamente un asunto venezolano.

La magnitud de la migración, la importancia energética del país, la presencia de actores criminales transnacionales y la competencia geopolítica en el hemisferio han convertido la crisis venezolana en un asunto de seguridad estratégica para Estados Unidos.

Esta dimensión quedó particularmente clara en la reciente entrevista concedida por Donald Trump a Axios la semana pasada.

Más allá de la controversia provocada por sus declaraciones sobre el alcance de su poder, hubo un aspecto que pasó relativamente desapercibido. Trump habló de Venezuela como si se tratara de un caso concluido. No como una crisis en desarrollo, sino como un precedente. Un ejemplo de algo que, desde su perspectiva, ya produjo un resultado.

La observación es importante porque permite comprender cómo parece estar viendo Washington la situación venezolana.

Durante años, Estados Unidos siguió siendo la mayor potencia del mundo, pero acumuló experiencias traumáticas en Afganistán, Irak y otras regiones donde la superioridad militar no se tradujo necesariamente en resultados políticos duraderos. La capacidad de actuar permanecía intacta; la capacidad de producir desenlaces estables era mucho más discutible.

Trump parece obsesionado precisamente con esa diferencia.

En su conversación con Axios insistió en una idea recurrente: Estados Unidos debe recuperar la capacidad de imponer resultados y no limitarse a administrar crisis.

Vista desde esa óptica, Venezuela adquiere un significado que trasciende sus fronteras. Se convierte en una demostración.

No necesariamente de fuerza militar. Tampoco únicamente de presión económica. Más bien de la capacidad de Washington para alterar una realidad política, estabilizar posteriormente el escenario y crear condiciones para una nueva etapa institucional.

Por eso resulta significativo que Trump haya vinculado repetidamente a Venezuela con Cuba e Irán. En su narrativa, Venezuela aparece como el precedente; Cuba como el siguiente desafío hemisférico; e Irán como la prueba de alcance global de esa misma lógica estratégica.

Se puede estar de acuerdo o no con esa visión. Pero ignorarla sería un error. Porque ayuda a explicar muchas de las decisiones que observamos actualmente.

Ayuda a entender por qué la discusión se concentra en la construcción institucional. Ayuda a comprender por qué determinados actores aparecen en escena mientras otros permanecen temporalmente en segundo plano. Y ayuda a interpretar por qué Washington parece interesado en consolidar estructuras antes que acelerar calendarios electorales.

En ese contexto, María Corina Machado conserva un activo que nadie puede sustituir: la legitimidad popular. Su liderazgo no proviene de un reconocimiento internacional ni de una designación burocrática. Proviene de millones de venezolanos que la identifican como la figura que simboliza la posibilidad de una ruptura democrática con el pasado.

Pero las sociedades necesitan más de una forma de legitimidad. Necesitan también legitimidad institucional. La primera permite ganar elecciones. La segunda permite gobernar después de ganarlas. Presentarlas como alternativas incompatibles constituye un error de análisis. Son piezas distintas de una misma construcción.

La transición venezolana parece estar entrando precisamente en esa etapa: la de ensamblar las piezas.

No es una fase particularmente emocionante. Carece de la épica de las campañas electorales. No ofrece imágenes multitudinarias ni discursos memorables. Está llena de reuniones técnicas, negociaciones discretas y discusiones jurídicas que rara vez capturan la atención pública.

Sin embargo, es probablemente la etapa más importante. Porque el verdadero desafío de Venezuela no consiste en cambiar de gobernante. Reside en impedir que cualquier futuro gobernante vuelva a disponer de un poder sin controles. Esa es la diferencia entre una alternancia y una democracia. Y también la diferencia entre una transición política y la reconstrucción de un Estado.

Las naciones no comienzan una nueva época cuando cae un régimen.

Comienzan una nueva época cuando las instituciones vuelven a ser más importantes que los hombres que las ocupan.